



CDSI

Comissió de Drets Socials i Inclusió
Parlament de Catalunya

Sessió 35. Dimecres, 13 de maig de 2026. XV legislatura

DOSSIER

ORDRE DEL DIA

1. Compareixença d'una representació d'Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió per a presentar l'informe «Violència i abandonament institucional vers les persones migrants». Tram. 357-00886/15 Comissió de Drets Socials i Inclusió. Compareixença.
 2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials i Inclusió amb la consellera de Drets Socials i Inclusió sobre l'impacte de la regularització massiva d'immigrants. Tram. 354-00325/15 Joan Garriga Doménech, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
 3. Proposta de resolució sobre les mesures per a la integració completa de totes les persones amb discapacitat auditiva total o parcial. Tram. 250-00861/15 Grup Parlamentari de VOX en Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 351, 18).
 4. Proposta de resolució sobre el garantiment de l'accés universal a l'aigua i la defensa dels drets socials davant mesures municipals restrictives. Tram. 250-00896/15 Grup Parlamentari Comuns. Debat i votació (text presentat: BOPC 363, 22).
 5. Proposta de resolució sobre la implantació de la figura de mediació de la comunitat gitana. Tram. 250-00901/15 Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 363, 29; esmenes: BOPC 418, 30).
 6. Proposta de resolució sobre l'accés universal a l'aigua com a bé comú i la protecció de les fonts públiques. Tram. 250-00920/15 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 370, 31; esmenes: BOPC 418, 31).
-

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les mesures per a la integració completa de totes les persones amb discapacitat auditiva total o parcial

250-00861/15

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 63413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2025

A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, María Elisa García Fuster, diputada del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la integración completa de todas las personas con discapacidad auditiva total o parcial, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials i Inclusió, con el siguiente texto:

Exposición de motivos

Son diversas las fuentes en las que se exponen los datos del número de personas con discapacidad auditiva en Cataluña, por lo que es relevante disponer de ellas - y destacarlas- para tener un conocimiento amplio sobre la materia.

Según fuentes del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, en nuestra región hay un total de 35.643 personas con reconocimiento legal de discapacidad auditiva. Diferente es el dato expuesto por el INE, que afirma que en Cataluña hay un total de 75.100 hombres y 99.000 mujeres, lo que hacen un total de 174.100 personas con discapacidad auditiva. Además, según la Encuesta de Salud de Cataluña realizada por el Departamento de Sanidad, hay un total de 81.788 hombres y 123.518 mujeres, lo que hacen un total de 205.306 personas con discapacidad auditiva.

Cabe decir que en las encuestas realizadas por los organismos públicos (INE, por ejemplo) la manera de determinar qué es y qué no es discapacidad auditiva es el parecer de la persona objeto de la encuesta, no el reconocimiento legal de esa discapacidad, por lo que los datos siempre hay que estudiarlos con cierta cautela.

Como vemos, son muchas las personas en nuestra tierra afectadas por esta discapacidad, lo que de manera inevitable les genera dificultades sociales y laborales a la hora de poder prosperar en sus vidas. Ejemplo de ello es el estudio con nombre «El agravio económico de las personas con discapacidad en la ciudad de Barcelona» realizado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, en el que se destaca que las personas con discapacidad auditiva, sufren cada año un agravio económico de más de 24.000 € respecto al resto.

Si bien es cierto que, tanto en Cataluña como a nivel nacional, cada vez más las Administraciones Públicas ofrecen posibilidades a quienes sufren esta

discapacidad (como podría ser el servicio de atención exclusivo para personas con problemas auditivos en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), aún no es suficiente.

Las Administraciones, empezando por la Generalitat de Cataluña, pueden hacer más y pueden hacerlo mejor. Según la OMS, para ampliar los servicios de atención otológica y audiológica solo hace falta una inversión adicional anual de menos de 1,40\$ (o lo que es lo mismo, 1,32€) por persona.

Que hay una demanda de ayuda por parte de las personas con discapacidad auditiva no es un canto al cielo realizado por este Grupo Parlamentario, sino una realidad que los datos claman. El estudio «Propuestas y análisis de las prestaciones sociales para la adquisición de productos de apoyo a la discapacidad (PÚA)» realizado por la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS), el 26% de las solicitudes de Ayudas para productos de apoyo a la discapacidad en Cataluña las hicieron personas con discapacidad auditiva, que representan no llega al 5% del total de personas con discapacidad.

La encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2020, nos demuestra que aunque el uso de la Lengua de Signos es cada vez mayor en la gente joven, su uso es minoritario entre las personas con discapacidad auditiva. De hecho, solo un 2% se comunica mediante este lenguaje.

La lengua de signos española (de ahora en adelante, LSE), está regulada por la Ley 27/2007 de 23 de octubre. Mediante ella, se reconoce y se regula este tipo de comunicación que utilizan las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España. Y, además, garantiza que puedan utilizarla con total libertad. Este lenguaje les permite a quienes sufren esta discapacidad el comunicarse de manera efectiva y más cómoda para ellos, por lo que su uso y el incentivo del aprendizaje, es una garantía de mejora en la comunicación de estos.

En relación del uso de la lengua de signos en la vida social, la presencia de un intérprete de signos es realmente clave y beneficiosa para múltiples sectores profesionales, pues garantiza la accesibilidad del colectivo de personas sordas y sordomudas a todas las áreas importantes del día a día.

A nivel regional, ya algunas comunidades están implementando el uso de la lengua de signos junto a intérpretes en todos los ámbitos. Ejemplo de ello, es la implementación de un sistema de tele-interpretación en directo en lenguaje de signos en los hospitales, mediante un dispositivo móvil, que ha funcionado con éxito. Este sistema permitirá las comunicaciones entre el personal sanitario y las personas que lo necesiten con deficiencias auditivas.

Dicho esto, es conveniente comenzar a buscar alternativas en todos los sectores para conseguir progresivamente una integración integral de las personas con discapacidad auditiva en nuestra sociedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente:

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a:

Primero. Incentivar la implementación de cursos de aprendizaje de lengua de signos en el ámbito sanitario a fin de formar a su personal para que sea capaz de atender a las personas con discapacidad auditiva los 365 días del año sin necesidad de tener retrasos en la espera.

Segundo. Poner fin a la partida presupuestaria destinada a Parla.cat, los cursos de acogida lingüística y demás iniciativas orientadas a la imposición del catalán en el ámbito sanitario, destinando esta partida a la formación en lengua de signos y a dispositivos digitales que faciliten la comunicación de las personas con discapacidad auditiva.

Tercero. Fomentar la implementación de cursos de aprendizaje de lengua de signos en el ámbito educativo, tanto a nivel docente como al alumnado en formaciones extracurriculares, a fin de formar a nivel básico y poder dar una respuesta efectiva a los alumnos que presenten discapacidad auditiva.

Cuarto. Abrir una línea de subvenciones en menos de tres meses para fomentar la formación en lengua de signos a personas con discapacidad auditiva y a sus familias que les permita una adaptación efectiva al día a día.

Palacio del Parlament, 3 de noviembre de 2025

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto;
María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX

Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el garantiment de l'accés universal a l'aigua i la defensa dels drets socials davant mesures municipals restrictives

250-00896/15

PRESENTACIÓ: GP COMUNS

Reg. 68262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.11.2025

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Núria Lozano Montoya, diputada del Grup Parlamentari Comuns, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la garantia de l'accés universal a l'aigua i la defensa dels drets socials davant mesures municipals restrictives, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió, amb el text següent:

Exposició de motius

L'accés a l'aigua potable és reconegut per les Nacions Unides com un dret humà fonamental i, en l'àmbit català, com un bé essencial que ha de ser garantit sense discriminacions. Les administracions públiques tenen l'obligació de protegir aquest dret i assegurar que cap persona es vegi privada de l'aigua necessària per viure amb dignitat.

A Catalunya, malgrat que les mesures restrictives de l'aigua van deixar de ser obligatòries un cop finalitzat el període de sequera, en alguns municipis es mantenen, des de fa setmanes, les fonts públiques tancades, encara que sí se'n fa ús de l'aigua amb finalitat de rec ornamental. I encara més, a Martorell el govern municipal proposa també modificar l'ordenança de convivència per prohibir omplir garrafes, ampolles o qualsevol recipient, a les fonts del municipi amb sancions que poden arribar als 750 euros. Aquestes mesures, adoptades sense justificació suficient, limiten un accés bàsic a un dret garantit a tota la ciutadania.

No existeix cap motiu econòmic ni tècnic que n'avalí la necessitat. L'Ajuntament no assumeix costos variables pel consum de les fonts, i no consten incidents de convivència o seguretat relacionats amb l'ús d'aigua per part de veïns i veïnes, una pràctica que s'ha produït durant anys amb total normalitat.

Entitats socials i especialistes en drets socials, com l'Institut Metròpoli i ECAS, han alertat que la prohibició proposada crea un precedent perillós, criminalitza necessitats bàsiques i deixa un ampli marge d'arbitrarietat en la seva aplicació. També han advertit que pot afectar especialment persones sense llar i famílies en situació de vulnerabilitat que depenen de les fonts per garantir necessitats quotidianes que els permeti viure, netejar-se, cuinar i arribar a uns mínims de benestar personal i familiar.

Més enllà de l'emergència social, l'emergència climàtica i l'increment de les temperatures associat a la mateixa, exigeixen per raons de salut que tota la població, especialment infants, gent gran i persones en situació d'exclusió

residencial, disposin d'un servei de subministrament d'aigua potable a l'espai públic, per protegir-se front als episodis de calor extrem.

La vinculació que fa l'equip de govern municipal entre l'ús de les fonts i les ocupacions irregulars no disposa de cap base demostrada i contribueix a generar estigma, por i confusió entre la població. Aquest enfocament fragmenta la cohesió social i desvia l'atenció dels reptes socials reals del municipi.

Tancar fonts públiques i convertir-ne l'ús en una infracció sancionable contravé els principis de proporcionalitat i no discriminació, i suposa un retrocés en els valors de convivència i solidaritat que han caracteritzat històricament la ciutat de Martorell. En aquest context, el Parlament té la responsabilitat de vetllar pels drets bàsics de la ciutadania i d'instar les administracions locals a evitar mesures arbitràries que perjudiquin l'accés a un recurs essencial com és l'aigua.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Comuns presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reafirma que l'accés a l'aigua potable és un dret humà essencial i que cap administració pública pot limitar-ne l'ús de manera injustificada o discriminatòria.
2. El Parlament expressa la seva preocupació per la decisió de l'Ajuntament de Martorell de mantenir tancades les fonts públiques i de proposar sancions per omplir recipients d'aigua, atès que aquestes mesures no disposen d'una justificació tècnica, social o de convivència suficient.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar perquè els municipis garanteixin l'accés universal a punts d'aigua potable a l'espai públic i perquè cap ordenança municipal estableixi restriccions o sancions contràries als drets humans que puguin afectar persones vulnerabilitzades, garantint que cap família queda desprotegida davant una necessitat tan bàsica i elemental.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a emetre recomanacions als ens locals per assegurar que la regulació de l'espai públic i les polítiques de convivència respectin els drets fonamentals i evitin la criminalització i estigmatització de necessitats bàsiques com l'accés a l'aigua.
5. El Parlament mostra el seu suport a les entitats socials i comunitàries que treballen per garantir l'accés equitatiu a l'aigua i per defensar els drets de les persones que es puguin veure afectades per mesures restrictives.
6. El Parlament reafirma el seu compromís amb un model de gestió de l'aigua basat en la sostenibilitat, la justícia social i el respecte als drets humans, i fa una crida a totes les administracions a actuar amb criteris de proporcionalitat, equitat i protecció dels col·lectius vulnerabilitzats.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2025

David Cid Colomer, portaveu; Núria Lozano Montoya, diputada, GP Comuns

Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

Proposta de resolució sobre la implantació de la figura de mediació de la comunitat gitana

250-00901/15

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 68874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.11.2025

A la Mesa del Parlament

Juan Fernández Benítez, portaveu, Cristian Escribano Ramírez, diputat, Montserrat Berenguer Messeguer, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la implementació de la figura de mediador o mediadora de la comunitat gitana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió, amb el text següent:

Exposició de motius

En els darrers anys, diversos ajuntaments de Catalunya han aprovat, mitjançant acords plenaris, la incorporació d'un mediador o mediadora de la comunitat gitana amb l'objectiu de promoure la inclusió, la convivència i la lluita contra l'absentisme escolar dins d'aquest col·lectiu. Aquesta figura, impulsada en el Pla Integral del Poble Gitano i prevista en el marc dels contractes-programa de col·laboració entre el Govern i els ens locals, es concep com una eina de mediació i acompanyament que ha de contribuir a millorar la comunicació entre les famílies, els centres educatius i l'administració local.

Tanmateix, en molts municipis on s'ha aprovat la seva creació, la figura encara no s'ha implementat, i el procés de contractació o designació s'ha vist retardat per qüestions administratives, pressupostàries o de coordinació entre administracions. És el cas, per exemple, de Mataró, on el Ple municipal va aprovar per unanimitat la creació del mediador gitano el novembre del 2023, però on la plaça encara no ha estat convocada ni dotada pressupostàriament més d'un any després.

Aquesta situació posa en evidència que el programa previst pel Govern té limitacions importants en la seva eficàcia i execució pràctica. Les bones intencions no poden quedar en declaracions simbòliques o en titulars de premsa: cal assegurar que les figures de mediació previstes es contractin realment, amb criteris clars de selecció, formació i avaluació de resultats.

A més, és imprescindible garantir que aquesta figura s'emmarqui dins d'un model professionalitzat i coordinat amb els serveis socials, educatius i de convivència de cada municipi, i que respongui a objectius mesurables, com ara la reducció de l'absentisme escolar, la millora de la inserció laboral i la mediació en casos de conflicte veïnal o comunitari.

Des d'una perspectiva d'igualtat i eficàcia en la despesa pública, no és lògic que hi hagi ajuntaments que disposin d'aquesta línia de suport i no la facin efectiva. El Govern de la Generalitat, com a responsable de finançar i super-

visar els contractes-programa amb els municipis, ha d'insistir en el seu impuls i promoure la seva implementació efectiva, d'acord amb el previst en el Pla Integral del Poble Gitano.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Promoure, a través del Departament de Drets Socials, que tots els ajuntaments que hagin aprovat la incorporació d'un mediador o mediadora de la comunitat gitana executin efectivament la seva contractació abans de la finalització de l'exercici 2026, mitjançant la formalització o activació dels corresponents contractes-programa.
2. Supervisar i avaluar a tots els municipis catalans l'estat d'implementació de la figura del mediador o mediadora de la comunitat gitana. Per això, el Govern ha d'elaborar un informe públic abans del 30 de juny de 2026 que reculli el nombre de municipis amb mediador gitano actiu o pendent de contractar, els motius del retard i les bones pràctiques detectades en matèria de mediació comunitària.
3. Garantir la coordinació interdepartamental entre Drets Socials, Educació i Administració Local per assegurar que aquestes figures actuïn amb eficàcia, especialment en la millora de la convivència veïnal i la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar, així com promovent la continuïtat de l'alumnat més enllà dels estudis obligatoris.
4. Preveure mecanismes de suport tècnic i formatiu per als ajuntaments que encara no hagin pogut implementar la figura, facilitant perfils professionals formats en mediació i coneixement del context comunitari.
5. Assegurar la transparència en l'assignació i ús dels fons destinats a aquests contractes-programa, publicant anualment la relació de municipis beneficiaris i l'import atorgat, així com els resultats obtinguts.
6. Transmetre aquesta resolució als membres de l'Intergrup del Poble Gitano d'aquest Parlament, a fi que puguin estudiar i promoure mesures per a la seva millor implementació.

Palau del Parlament, 28 d'octubre de 2025

Juan Fernández Benítez, portaveu; Cristian Escribano Ramírez; Montserrat Berenguer Messeguer, diputats, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74974 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDSI, 11.02.2026

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 74974)

Esmena 1

GP Socialistes i Units per Avançar (1)

De modificació al punt 2

2. Supervisar i avaluar l'estat d'implementació de la figura del mediador o mediadora de la comunitat gitana *dels ens locals que en el període de contracte programa 2022-2025 tenen o han tingut figura de mediació*. Per això, el Govern ha d'elaborar un informe públic abans del 30 de juny de 2026 que reculli el nombre de municipis amb mediador gitano actiu, els motius del retard i les bones pràctiques detectades en matèria de mediació comunitària.

Esmena 2

GP Socialistes i Units per Avançar (2)

De modificació al punt 3

3. Garantir la coordinació interdepartamental entre Drets Socials, Educació i Administració Local per assegurar que *tant la figures dels mediadors com dels promotors escolars* actuïn amb eficàcia, especialment en la millora de la convivència veïnal i la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar, així com promovent la continuïtat de l'alumnat més enllà dels estudis obligatoris. *Així mateix, potenciar el reforç mutu i la coordinació efectiva entre el mediador cívic comunitari de referència provincial i el mediador referent del contracte programa.*

Esmena 3

GP Socialistes i Units per Avançar (3)

De modificació al punt 4

4. Preveure mecanismes de suport tècnic i formatiu per als ajuntaments que encara no hagin pogut implementar la figura, facilitant *quan s'escaigui, la vinculació d'aquests amb entitats del territori que puguin acompanyar el desplegament.*

Esmena 4

GP Socialistes i Units per Avançar (4)

D'addició d'un nou punt

7. *Continuar apostant per la figura del mediador o mediadora del Poble Gitano com a eina clau per a la convivència i la inclusió social, reconeixent el seu paper com a agent proactiu de cohesió i equitat social, així com el seu caràcter estratègic en la prevenció de conflictes, la facilitació del diàleg entre la comunitat gitana i la societat en general, i la detecció i prevenció de situacions d'antigitanisme al territori.*

Esmena 5

GP Socialistes i Units per Avançar (5)

D'addició d'un nou punt

8. Continuar treballant amb les entitats i de la resta d'agents del territori, que actuen com a altaveu de possibles situacions que requereixen intervenció, tant en clau preventiva com mitjançant accions directes de mediació, garantint una resposta integrada, eficient i alineada amb els objectius de cohesió social i inclusió comunitària.

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

Proposta de resolució sobre l'accés universal a l'aigua com a bé comú i la protecció de les fonts públiques

250-00920/15

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 70098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.12.2025

A la Mesa del Parlament

Ester Capella i Farré, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Najat Driouech Ben Moussa, portaveu a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l'accés universal a l'aigua com a bé comú i la protecció de les fonts públiques a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials i Inclusió, amb el text següent:

Exposició de motius

L'aigua és un recurs essencial per a la vida i un dret humà reconegut internacionalment. A Catalunya, la gestió de l'aigua es fonamenta en el principi que es tracta d'un bé comú que ha de ser accessible a tota la ciutadania, amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Les fonts públiques formen part del patrimoni col·lectiu i històric dels municipis i compleixen una funció social rellevant, garantint l'accés universal a l'aigua potable en l'espai públic.

Així mateix, el Codi de Consum de Catalunya (Llei 22/2010) reconeix el dret de les persones consumidores a l'accés als serveis bàsics, incloent-hi els subministraments essencials, i obliga les administracions públiques a garantir que no es produeixin situacions de vulnerabilitat que impedeixin satisfer necessitats bàsiques com l'accés a l'aigua.

També la Llei 12/2007 de Serveis Socials recull el principi d'accés universal als serveis essencials, i preveu que les administracions han d'evitar que les persones en situació de risc o vulnerabilitat quedin excloses de recursos imprescindibles per a la vida quotidiana.

En l'àmbit local, la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Llei 8/1987) estableixen que els ajuntaments han de garantir la prestació adequada dels serveis públics de competència local, entre els quals s'inclouen les fonts i infraestructures d'abastament públic d'aigua, i han d'actuar amb criteris de proporcionalitat, interès general i no discriminació quan regulen l'ús de l'espai públic.

Les fonts públiques formen part del patrimoni comunitari i històric dels municipis i compleixen una funció essencial de servei públic, garantint un accés universal i directe a l'aigua potable. Per això, qualsevol limitació del seu ús ha de tenir un fonament sanitari, tècnic i jurídic clar, tal com exigeixen els

principis de bona administració i proporcionalitat recollits tant a la legislació catalana com a la normativa bàsica estatal.

Recentment, però, a la població de Martorell, el govern municipal ha proposat modificar l'Ordenança de convivència per prohibir omplir garrafes, ampolles o qualsevol tipus de recipient a les fonts públiques, preveient sancions de fins a 750 euros. Aquesta restricció s'ha adoptat sense una justificació tècnica suficient, sense informes que acreditin un risc per a la salut pública i sense valorar l'impacte social de la mesura.

Aquest tipus de decisions contradiu el principi de garantia d'accés a l'aigua com a servei essencial reconegut per la legislació catalana, i pot afectar de manera desproporcionada col·lectius vulnerables o persones que depenen de les fonts públiques en situacions de dificultat.

Cal recordar que la normativa catalana en matèria de serveis bàsics i subministraments essencials, així com els principis generals del dret administratiu, exigeixen que les administracions públiques evitin qualsevol actuació que dificulti l'accés a l'aigua sense causa degudament acreditada, i que tota restricció s'ha de justificar amb criteris objectius i transparents.

Per tot això, és necessari instar les administracions competents a revisar aquestes mesures, assegurar el respecte al dret d'accés a l'aigua i promoure una gestió pública, comunitària i garantista del recurs.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Reiterar el reconeixement de l'aigua com a bé comú i dret essencial, garantint-ne l'accés universal i no discriminatori en l'espai públic.
2. Recomanar que qualsevol regulació municipal relacionada amb l'ús de fonts públiques es basi en criteris de salut pública, sostenibilitat i equitat, i que s'elabori amb informes tècnics, processos participatius i transparència.
3. Elaborar un informe jurídic sobre la legalitat de la modificació d'ordenances municipals de convivència que pretén prohibir l'ompliment de recipients a les fonts públiques atès que la mesura afecta a un dret universal i comporta afectació també a l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria de Drets Socials i accessibilitat a l'aigua com a bé bàsic per a la vida. L'informe hauria d'incorporar una avaluació sobre la manca de viabilitat tècnica de la mesura.
4. Fomentar un model de gestió pública i comunitària de l'aigua que reforci el seu caràcter de bé comú, assegurui la preservació del recurs i garanteixi l'accés a totes les persones.
5. Promoure campanyes informatives i educatives sobre el consum responsable de l'aigua i el valor social i ambiental de les fonts públiques.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2025

Ester Capella i Farré, portaveu; Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt; Najat Driouech Ben Moussa, portaveu a la CDSI, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 74975 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDSI, 11.02.2026

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 74975)

Esmena 1

GP Socialistes i Units per Avançar (1)

~~De supressió del punt 3~~

~~3. Elaborar un informe jurídic sobre la legalitat de la modificació d'ordenances municipals de convivència que pretén prohibir l'ompliment de recipients a les fonts públiques atès que la mesura afecta a un dret universal i comporta afectació també a l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria de Drets Socials i accessibilitat a l'aigua com a bé bàsic per a la vida. L'informe hauria d'incorporar una avaluació sobre la manca de viabilitat tècnica de la mesura.~~
